**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES**

27 de febrero de 2009

Hon. Angel R. Peña Ramírez
Presidente
Comisión del Trabajo y
Relaciones Laborales de la Cámara
El Capitolio, Apartado 9023431
San Juan, P.R. 00902-3431

Re: Proyecto de la Cámara 174

Estimado Representante y demás miembros de la Comisión del Trabajo y Relaciones Laborales de la Cámara, agradecemos la oportunidad que nos extiende para emitir nuestros comentarios ante este Honorable Cuerpo.

En carta fechada 10 de febrero de 2009 y recibida en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres el 13 de febrero de 2009 se nos citó para comparecer ante ustedes, en el día de hoy, con el propósito presentar nuestros comentarios al proyecto de epígrafe que lleva como título lo siguiente:

“Para enmendar el inciso (b) en la Sección 4; añadir un nuevo inciso (a)(2) y redesignar los actuales incisos (a)(2) y (a)(3) como los incisos (a)(3) y (a)(4), respectivamente, en la Sección 4 de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, conocida como ‘Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico’, a los fines de incluir los requisitos de elegibilidad para que la víctima de violencia doméstica pueda reclamar los beneficios de desempleo y la no divulgación de éstos; un plan de adiestramiento dirigido al personal gerencial y el personal que atiende los casos de violencia doméstica.

La presente medida tiene como propósito el reconocer a las víctimas de violencia doméstica el derecho a reclamar los beneficios por desempleo según lo dispuesto en la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, conocida como *Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico*. Este proyecto representa un esfuerzo para atender las repercusiones de la violencia en aquellos casos en los que la sobreviviente de violencia doméstica se ve en la necesidad de renunciar a su trabajo por razones ajenas a su voluntad.

La violencia doméstica es uno de los males sociales que más impacta nuestro país. Diariamente se reportan nuevos casos de violencia doméstica en sus distintas manifestaciones: maltrato físico y emocional, intimidación, persecución y, en los casos más extremos, asesinatos.

El número de incidentes de violencia doméstica reportados a la Policía de Puerto Rico para los años más recientes es de aproximadamente 22,838 casos para el 2005¹; 22,951 casos en el 2006²; 19,222 durante el 2007³; y 17,671 casos en el 2008⁴. Las estadísticas reflejan además, que en el 2006, de los casos de violencia doméstica reportados, 214 ocurrieron en el área de trabajo; en el año 2007 se reportaron 70 casos en ese mismo reglón y en el 2008 se reportaron 24.

¹ Oficina de la Procuradora de las Mujeres, *Violencia doméstica en Puerto Rico 1990-2006*, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2009, pág. 6

² *Ibid*

³ Policía de Puerto Rico, División de Estadísticas, *Informe Preliminar Incidentes de Violencia Doméstica 2007*.

⁴ Policía de Puerto Rico, División de Estadísticas, *Informe Preliminar Incidentes de Violencia Doméstica 2008*.

No obstante, aún cuando estos números reflejan una merma en el número de casos reportados, las cifras son alarmantes y prevalece la necesidad de promover la política pública de adoptar medidas de protección, seguridad y ayuda a las víctimas de violencia doméstica.

Es meritorio mencionar que en el 2006, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 217 de 29 de septiembre de 2006, conocida como la Ley del Protocolo sobre el manejo de Violencia Doméstica en el Empleo. Esta ley requiere que en todo lugar de trabajo o empleo se promulgue e implemente un Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia Doméstica. El propósito de esta legislación fue proveer uniformidad a las medidas y al procedimiento a seguir cuando una empleada o empleado es víctima de violencia doméstica y de esta forma manejar adecuadamente los casos que pueden traer elementos de peligrosidad al ambiente de trabajo.

Sin embargo, tenemos que señalar que las repercusiones de la violencia doméstica, pueden ser de tal magnitud, que aún con la implementación de un protocolo para el manejo de esas situaciones en el trabajo, la víctima sobreviviente puede sentirse amenazada, atemorizada o insegura. Es en situaciones como esas donde la víctima debe tener la alternativa de renunciar o cambiar de empleo sin el temor o la incertidumbre de qué ocurrirá durante en periodo en el que se encuentra desempleada.

Los eventos de violencia doméstica tienen unos efectos devastadores en la salud física, mental y emocional de las mujeres. En muchas víctimas de

maltrato se observan los siguientes indicadores: baja autoestima, sentimiento de desvalidez, temor a tomar decisiones, enfermedades físicas y mentales (como la depresión), aislamiento, miedo paralizante, entre otros.⁵

Como resultado de estos efectos, la calidad de vida de la persona víctima de violencia doméstica se ve trastocada en todos sus aspectos. El desempeño laboral de la víctima de violencia doméstica puede verse impactado y manifestarse de las siguientes formas: cambio en las relaciones entre compañeros y compañeras, cambio en la calidad del trabajo, temor al contestar las llamadas telefónicas, estado de tensión constante y problemas con los horarios de entrada y salida.

Lamentable, a raíz de los efectos antes mencionados, la víctima de violencia doméstica se puede ver forzada a renunciar a su trabajo o recibir algún tipo de indicación o recomendación de buscar un nuevo lugar de empleo. Esto es un infortunio para aquellas mujeres, para las cuales su empleo es el único medio para sustentar sus necesidades y las de su familia, la única fuente de ingresos en el hogar o el complemento necesario para subsistir. Es en estos casos donde se le debe proveer a la mujer una alternativa para poder sobrellevar las cargas económicas. La necesidad de cumplir con los compromisos económicos la puede inducir a incurrir en algún tipo de conducta riesgosa, como lo podría ser el mantenerse en el mismo lugar de trabajo e incluso reiniciar su relación con el agresor.

⁵ Oficina de la Procuradora de las Mujeres, *La Violencia Doméstica nos afecta a todos*, Revisado en el 2009, Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La Ley Num. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, conocida como *Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico*, establece una provisión para el pago de compensación a personas desempleadas. La finalidad de esta ley es promover la seguridad de empleo facilitando las oportunidades de trabajo por medio del mantenimiento de un sistema de oficinas públicas de empleo y proveer para el pago de compensación a personas desempleadas por medio de la acumulación de reservas. La ley crea un fondo de desempleo, distinto y separado de todo los dineros y fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sufragado por las contribuciones pagadas por los patronos de acuerdo con los parámetros establecidos en la propia Ley.

Según la sección 4, inciso (a)(1) de la Ley de Seguridad en el Empleo de Puerto Rico considerará que un trabajador asegurado es elegible para recibir crédito siempre y cuando cumpla con los requisitos y las reglas establecidas por el Secretario del Departamento del Trabajo. Además de los requisitos establecidos, hay unas causas que pueden provocar la descalificación de la persona desempleada, para recibir el beneficio. Entre estas causas se enumeran: (1) el no estar apto para trabajar o no estar disponible para realizar trabajo adecuado durante dicha semana; o (2) **abandonó un trabajo adecuado voluntariamente y sin justa causa**, entre otras razones.

Aun cuando en la Ley de Seguridad de Empleo, ni en el Reglamento para Regular el Pago de Beneficios al amparo de esta ley, se define el término “justa causa”, la ley dispone que la misma debe ser interpretada liberalmente. Sin

embargo, en casos tan delicados como la violencia domestica, se debe establecer claramente en la ley que existe justa causa. Más aun, cuando la renuncia en estas situaciones surge por causas ajenas a la voluntad de la víctima en razón de la protección de su seguridad, salud y vida, según establecen los principios rectores de la citada ley. A tenor con este reconocimiento a las circunstancias que confronte la víctima de violencia doméstica es que en otras jurisdicciones de los E.E.U.U. han probado legislación similar a ésta.

La inseguridad económica producida por el desempleo es una seria amenaza a la salud, seguridad y bienestar del ser humano, y cuanto más cuando ésta ocurre en el marco de la violencia doméstica. No debemos permitir que una mujer víctima de violencia doméstica, que necesita proteger su vida, su seguridad y la seguridad de los suyos, se vea limitada a no poder renunciar a su trabajo por temor a enfrentarse a la posibilidad no contar con la ayuda económica necesaria para enfrentarse a un proceso de restaurar su vida, de redefinirse y de buscar un nuevo empleo.

Por todo lo antes expuesto, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres concurre con los principios y propósitos del Proyecto del Senado 174. Recomendamos además se analice por las agencias con el peritaje sobre la materia, si esta medida va acorde con las regulaciones federales sobre el desempleo y cualquier otro aspecto especializado sobre la ley de desempleo vigente. Entendemos por deferencia que es necesario que se tomen en cuenta

los comentarios que brinde el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, quien será la agencia que colaborará con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en los adiestramientos al personal.

Agradecemos la oportunidad que se nos brinda de someter nuestros comentarios en torno a este proyecto y reiteramos nuestra disposición para expresarnos sobre cualquiera otra medida que redunde en beneficio a las mujeres en Puerto Rico.

Cordialmente,

Johanne Vélez García
Procuradora Designada